

Capítulo 6



Del conflicto armado al posconflicto, y del posconflicto a los neoconflictos en los Montes de María, Colombia

Guillermo de León Vargas¹

Resumen

Las problemáticas estructurales, incluso después del conflicto armado, siguen siendo una coyuntura aún sin solucionar en los Montes de María: conflictos por la tierra (restitución de tierras, formalización de predios, catastro y delimitación geográfica de linderos, conflictos entre campesinos, etc.); usurpación de recursos naturales para la privatización y uso exclusivo de modelos corporativos; crimen organizado y asociatividad con bandas juveniles (narcomenudeo); amenazas e intimidación. Estas patologías sociales crecen de manera exponencial, el orden social es vulnerado y, en consecuencia, la incidencia política se fragmenta y la zozobra se apodera de los pobladores.

Palabras clave: conflicto armado, posconflicto, neoconflictos.

Abstract

The structural problems, even after the armed conflict, remain unresolved in the Montes de Maria are: conflicts over land (restitution of land, formalization of plots, cadastre and geographic delimitation of boundaries, conflicts between peasants, etc.); usurpation of natural resources for privatization and exclusive use of corporate models; organized crime and association with youth gangs (narcotics trafficking); threats and intimidation. These social pathologies grow

¹ Candidato a doctor en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. Magister en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Descentralización de la Universidad del país Vasco. Especialista en Gerencia Pública de CECAR. Especialista de Gerencia de Programas y Empresas Sociales de la Universidad Autónoma de Colombia. Contador Público de la Universidad Autónoma de Colombia. Director ejecutivo de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María. Correo electrónico: gvargas@fmontesdemaria.org

exponentially, the social order is violated and consequently the political incidence is fragmented, and the anxiety takes over the inhabitants.

Keywords: armed conflict, post-conflict and neo-conflict

Introducción

Los movimientos sociales, particularmente las organizaciones de víctimas, buscan recuperar y reconstruir el tejido social integrado desde la acción colectiva y a través de las capacidades institucionales; sin embargo, las condiciones de orden parecen ser flexibles y descoordinadas, lo que reconfigura un nuevo panorama de circuitos de violencia y readaptación de nuevos estándares de desobediencia.

El objetivo del artículo consiste en contribuir al debate sobre los efectos de la intervención o intervencionismo del Estado frente al desarrollo territorial en el marco de un proceso de posconflicto que puede dar cuenta de la relación existente entre el orden social promovido, esperado por la sociedad civil, y las acciones conducidas por los gobiernos para salvaguardar el equilibrio social con garantías de seguridad ciudadana y visión compartida de progreso desde una planificación responsable. De esta manera, se comprenden los alcances de los movimientos sociales en paralelismo del posconflicto y los conflictos emergentes en los Montes de María.

Intervención, articulación y expectativas generadas en nombre del desarrollo

La subregión de los Montes de María está compuesta por 15 municipios que conforman la región Montes de María: María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Coloso, Ovejas, San Antonio de Palmito, Toluviejo (de los departamentos de Bolívar y Sucre). Esta ha sido sujeto de grandes intervenciones para establecer el orden social y potenciar el desarrollo rural con base en la sostenibilidad multidimensional, desde lo económico, político, cultural y medio ambiental.

Por ello, dicha zona fue parte de acciones de cooperación, algunas emblemáticas, como la de la Unión Europea en el marco del laboratorio de paz III; y otras, que, en consecuencia, han marcado grandes hitos para empoderar y potenciar las organizaciones en aras de promover la movilización social y la incidencia sociopolítica desde actores comprometidos con el desarrollo, la paz y la reconciliación.

En medio de tanto intervencionismo y poca articulación Gobierno-sociedad civil- sector privado e, inclusive, la misma cooperación que, a lo sumo, ya consolida sus propias acciones en territorio, se visualiza un panorama desarticulado, con una creciente forma de asumir protagonismo que difumina el esfuerzo de quienes sostienen los pilares sociales, como lo son los pobladores.

La esencia social en las transformaciones, en cuanto a intervenciones, dentro del territorio, no se deliberan en función de acción con daño, sin embargo, muchas veces no se reconoce el avance de las organizaciones sociales de base (OSB) ni el de los actores, que de cierta forma permanecen promoviendo estrategias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; por el contrario, se ha despertado ansiedad por manejar planes disfrazados de procesos para atender acciones concretas como una reacción fría tipificada en una matriz insensible del “marco lógico”.

Ahora bien, la institucionalidad compromete programas dirigidos a mantener el orden social, no obstante, la capacidad de respuesta por parte del Estado ha sido sectorizada bajo criterios un poco cuestionados, como es el caso de la “consolidación territorial” que, aunque no es objeto de estudio para el presente artículo, permite referenciar cómo se condiciona el progreso y se aísla el concepto de ideario de región, con lo que se desconcentra la visión compartida de desarrollo, el cual pretende potencializar y, en efecto, no solo priorizar.

Los gobiernos locales, algunos asociados con corrupción (detrimento patrimonial, malversación y mal utilización de recursos entre otros), ingobernabilidad y situaciones relacionadas con destitución y penalidades disciplinarias de mandatarios, recrudecen el panorama de esperanza en plena implementación de acciones e inversión para la construcción de paz como eje del posconflicto; es más, en la etapa de pre-gobernabilidad y gobernabilidad se utilizaron las insignias y símbolos de la paz para efectos

de estimar una relación directa con el presupuesto nacional, dirigiendo la atención a nuevos rubros que fuesen administrados por los entes territoriales.

Entonces, la paz y el desarrollo, en virtud del nuevo panorama del posconflicto, pasan por entender cuál es la apuesta política real que debe ser considerada para valorar el esfuerzo de resistencia y resiliencia en medio del conflicto armado, lo que lleva a preguntarnos: ¿Cuál debe ser el camino de la esperanza de centenares de víctimas para reconciliarse, inclusive, desde la misma política?

Lo mismo sucede con la intervención del sector privado, actor principal en un modelo reconstruido y direccionado bajo intereses desobedientes en función de la verdadera aptitud del territorio. La empresa privada tiene a su favor todo un espectro de concentración de capital humano y económico, lo que condiciona un poco su intervención, dado que la perspectiva de sus planes, programas o proyectos son exclusivamente ejecutadas en su área geográfica que, potencialmente, son impulsadas por fundaciones adscritas a su gremio y que constituyen un medio o puente para cumplir con la obligatoriedad de la responsabilidad social empresarial, a veces, sin mayor sentido de interlocución, sino más bien acomodación e imposición, figura por la cual se terminan reventando los procesos territoriales.

En lo referente a la articulación, se han dado pasos significativos por medio de las alianzas público-privadas (APP) que intentan generar esfuerzos compartidos de recursos (humanos-financieros-técnicos) para impactar con mayor vehemencia el bienestar social; sin embargo, este trabajo no integra a la sociedad civil, siendo que el beneficio es precisamente para los habitantes del territorio, por lo que lo que se debería lograr, también, con dichas alianzas es una apertura a un esquema que integre a los pobladores en la génesis de cada inversión (pre-intervención).

Para introducirnos a un modelo de intervención tripartita debemos tener en cuenta la gobernanza como modelo reestructurado, es decir, pensarnos una gobernanza moderna que estructure la lógica de la intervención. Partiendo de la apreciación de Mayntz (2001, p. 7):

A menudo se ha afirmado que la gobernanza moderna, la negociación entre actores políticos y sociales en redes de políticas mixtas o en estructuras neocorporativas, y la delegación de

funciones reguladoras a organizaciones privadas, indican una pérdida de la capacidad política de dirigir, un debilitamiento del Estado.

La gobernanza moderna debe conducir a fortalecer al Estado en la búsqueda de espacios donde los actores territoriales confluyan en una apuesta común como generador de desarrollo y paz, sobre todo en territorios violentamente afectados por condiciones de conflicto armado o social, como es el caso de los Montes María.

En efecto, el posconflicto en sí, más allá del concepto adecuado al que corresponda para muchos, posacuerdo o quizá posguerra, trae consigo esperanzas en los pobladores, que esperan respuestas: de acceso a intervenciones sociales para garantizar estabilidad y seguridad pública; intervenciones de desarrollo en infraestructura vial y conectividad; proyectos productivos y sostenibilidad económica; garantías de derechos y acceso a la justicia, todo esto conjugado en la denominación de paz territorial.

En sí, las intervenciones deben ser consecuentes con las necesidades públicas y no proyectos cortoplacistas con intención o intereses particulares. La coordinación debe ser parte de la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales con relación a la apuesta macro de la nación, con base en ello, la articulación con otros actores para concentrar esfuerzos y prever un mejor impacto.

Nuevos circuitos de violencia-neoconflictos territoriales en Montes María

La transición del conflicto al posconflicto ha abierto las posibilidades para generar esperanza en los Montes de María. En primera instancia, la capacidad del Estado en respuesta de programas en el marco de políticas públicas de paz con enfoque territorial. El diseño promueve la estabilidad requerida y esperada para fortalecer el tejido social y proyectar los territorios hacia la paz querida con garantías y sobre todo con seguridad.

Ahora bien, la seguridad en una etapa de transición al posconflicto es absolutamente necesaria, más cuando la respuesta del Estado depende de tiempos administrativos y presupuestales y de voluntad política, cualquiera

que sea el caso, si la seguridad no es constante y la presencia del Estado no se hace visible, los riesgos de desestabilidad y desequilibrio social se hacen latentes.

Comenzamos por analizar las tensiones territoriales, es decir, factores determinantes de vulneración del orden social y generadores de alertas. Unas de las consignas más frecuentes es autorreflexionar sobre el siguiente interrogante: ¿Quién conoce más del territorio y sus dinámicas que quienes habitan en él? Esto marca la primera premisa de análisis para entrar a la discusión sobre cuáles son los canales o conductos regulares para conocer los contextos y promover desde la sociedad civil alertas tempranas. Por consiguiente, el orden social tiene gran responsabilidad en los soportes de la sociedad civil, en identificar, analizar situaciones que pudiesen convertirse en riesgos de generación de violencias o focos de metaconflictos.

La lógica para mantener el equilibrio social pasa por entender el cumplimiento de las políticas, la noción del interés y la capacidad de los gobiernos en establecer esquemas socio-gubernamentales, a fin de direccionar el desarrollo con las garantías suficientes para su intervención, incluyendo el acompañamiento y la presencia de fuerza pública como parte del Estado, de modo que se avance en el diálogo y en los espacios de reconciliación traducidos en seguridad ciudadana.

Ahora, el deber ser contrasta con las realidades territoriales, las tensiones cada vez se convierten en conflictos emergentes con connotaciones violentas en muchos casos, y en otras, aparecen como tensiones progresivas, semicultas, pero operativa, condicionante y crecientes. Para ser más concretos, nos aproximamos de manera tal que se puedan establecer algunos conflictos territoriales para determinar si hay o no círculos de violencia inmersos y emergentes.

En los Montes de María las problemáticas estructurales mayormente asociadas al tema tierra, asumen una paz relativa, o como comúnmente puede denominarse, territorios en relativa calma, debido a conflictos emergentes o neoconflictos que aparecieron toda vez que el conflicto armado iba cesando. La tierra como elemento fundamental para el desarrollo rural fue tomando un matiz diferente de acuerdo con los conflictos del uso y vocación del suelo.

Una locomotora legalmente adherida a protocolos estatales promovió la industria del agro en escalas corporativas, con beneficios tributarios, acceso a créditos y una tendencia al monopolio de cultivos que extendían el panorama que una vez hizo parte de la gran riqueza alimentaria de la región. Las políticas públicas asociadas con la restitución de tierras y las víctimas marcaron una ruta legítima para recuperar lo perdido, o más bien, lo despojado; en tal sentido, en medio de tales luchas se iban gestando nuevos conflictos.

Por un lado, problemas entre campesinos por condicionantes sujetos al mercado de tierras en época del conflicto armado, tipificados según la norma como segundos ocupantes de buena fe, estatus de reconocimiento a aquellos que según investigaciones sustentadas no tuvieron nada que ver en asuntos de aprovechamiento, despojos o quizás asociatividad delictiva con grupos armados. De aquí se desprenden conflictos por reclamaciones que incluso han terminado en amenazas, agresiones y atentados. Un conflicto emergente con condiciones propias de violencia y violencia progresiva.

Por otro lado, incremento de amenazas a líderes sociales defensores de derechos humanos y, por supuesto, a aquellos reclamantes de tierras. Una tendencia maquiavélica de terror, generador de nuevos desplazamientos y promotor de desestabilidad del orden social. En este caso, el cual ya es de conocimiento de autoridades, aún en términos de seguridad, que los asuntos de protección son insuficientes y son determinantes para que la zozobra juegue un rol de tensiones progresivas hacia los conflictos sociales y políticos.

Otro panorama adyacente al conflicto armado que aparece como neoconflicto es la concentración de los recursos tierra-agua. Una problemática sujeta, en efecto, a los temas de monocultivos mayormente en territorios como el de María la Baja, San Onofre, Zambrano, el Carmen de Bolívar, Córdoba (con réplicas en menor escala en Toluviéjo y San Antonio de Palmito).

Para referenciar e identificar neoconflictos en una escala más precisa se encuentra el municipio de María la Baja, el cual presenta, más allá del panorama visual de la palma africana, conflictos por el agua. Pobladores sin acceso por la censura del permiso de las aperturas de compuertas, que de hecho están privatizadas en medio de un modelo de lo que representa un

bien público. Este tipo de problemáticas, no resueltas aún, han promovido movilizaciones sociales y en evidencia la Corporación Desarrollo Solidario, (2017) concluye que:

Estos monocultivos ocasionan graves consecuencias para el ecosistema de la zona debido a las grandes cantidades de químicos que utilizan y al mal manejo de los residuos, que ocasionan contaminación en las fuentes de agua y en las diferentes represas. Los habitantes de San José del Playón denuncian que, siendo el distrito de riego un bien público, su uso es un beneficio exclusivo para los grandes propietarios, causándoles a ellos el perjuicio de un agua contaminada y que no está en condiciones para el consumo humano. (párr. 4)

De manera similar, pero con otras connotaciones, se presenta en el municipio de San Onofre la extensión de monocultivos de especies forestales al igual que la desmedida y creciente concentración de tierras para uso de ganadería extensiva. Este fenómeno que de cierta forma aumenta la desigualdad social y desvirtúa la relación de los medios de producción agrícola, es un tema que se puede analizar con mayor profundidad a través del análisis del ordenamiento del territorio.

Para efectos de visualizar la problemática del neoconflicto, este se asocia con conflictos entre empresarios y víctimas (campesinos), quienes se ven afectados por la presunción de despojo de sus predios. Sumado a lo anterior, en el municipio de San Onofre en el año 2017 hubo 18 homicidios, para el primer semestre del 2018 llegaba a 10, lo más grave es que la tendencia delictiva aumenta, hasta el 14 enero de 2019 se registraron 4 muertes violentas, y de allí todo un circuito criminal que asocia un panorama hostil con actores reconfigurados, con una operación con modos menos visibles, pero igual o más agresivo que en periodos pasado, dado la influencia de los jóvenes en la cadena del microtráfico en doble vía, consumidores y expendedores, penetrando incluso las esferas rurales (El Herald, 2017).

Estos fenómenos, crecientes y desestabilizadores del orden social son promovidos por alianzas delictivas o circuitos criminales que interconectan el golfo de Urabá (Clan del Golfo) y el Golfo de Morrosquillo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que pasa por entender también la intermediación

delictiva en Santiago de Tolú y las zonas rurales, los cuales han presentado toda una actividad en dicho cordón territorial, aumentando acciones como el fleteo, extorsión e incluso atracos a campesinos que con esfuerzos bajan sus productos para comercializar.

Adherentes a las problemáticas nacionales se encuentran las migraciones de venezolanos que demandan atención. Gran parte de los municipios de los Montes de María, en la década de los 70 y 80 emigraron al vecino país para establecer un mejor futuro, dada la estabilidad económica y el valor del Bolívar con respecto al peso colombiano, en ese entonces las divisas, es decir, el efecto cambiario fueron determinantes para el sustento de muchas familias colombianas.

En la actualidad, el retorno es inminente y se gestan conflictos sociales de orden institucional, es decir, de respuesta gubernamental para ampliar cobertura y la atención a nuevos subsidiarios. Dadas las problemáticas ya existentes, los municipios colapsan, el presupuesto es deficiente para implementar políticas públicas, la capacidad y desempeño institucional es débil y el panorama, entonces, recrudece. La economía informal, el mototaxismo, particularmente, aumenta desmedidamente, esto genera conductas sociales impropias, disputas de espacios o sectores autoapropiados.

Ampliando el panorama, los circuitos de nuevas violencias reconfiguran nuevos polígonos de acciones delictivas asociadas a cultivos ilícitos, de la cuales, se estima, según información brindadas por pobladores del municipio de Ovejas en el Departamento de Sucre, sectores microfocalizados de cultivos de marihuana con extensiones de hasta 20 a 30 hectáreas. Esto es realmente preocupante, más si se habla de posconflicto y se desatiende el territorio, es decir, la seguridad pública parece divagar frente a un fenómeno que puede conducir a una nueva amenaza para el orden social.

La simple referencia ya marca una pauta para entender que tanto el enfoque territorial y los programas allí enmarcados han generado posibilidades de desarrollo y proyección del territorio cuando se transita en lo que el gobierno llamó en su momento un posconflicto temprano en los Montes de María. Me pregunto: ¿Se refirió a la desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María en el 2007 y la recuperación del

espacio territorial en términos de seguridad? o ¿más bien se sujetaba sobre los pilares del acuerdo de paz y la apuesta territorial de estabilizar la paz con garantías?

Lo cierto es que, independiente de las causas que hayan motivado a contemplar el posconflicto como primer territorio en el país, los habitantes, líderes sociales, víctimas entendían al posconflicto como una medida y no como un concepto; es decir, la reconciliación como primera medida, la restauración y reparación del daño causado, el acceso a bienes y servicios públicos que garantizara el retorno con seguridad, la transformación del campo y la apuesta productiva entre otros.

Al final, el riesgo es la multiplicación de los fenómenos y la proliferación en red de lo que intenta la aparición de neoconflictos, que, en sí, no deben confundirse con los conflictos de primer orden o tensiones primarias, sino con el efecto desestabilizador del orden asociado con la transición de la tensión al constreñimiento y al miedo generalizado que puede volver a posicionar al terror como medio de persuasión.

El pasado reciente del conflicto armado, inclusive, dejó problemáticas sin resolver, y que justo hoy son materia de análisis en medio de programas que intentan resurgir como alternativas de desarrollo. Si bien, la esperanza aún está puesta en mejorar condiciones de vida, en mitigar la pobreza y permitir un equilibrio más humano en medio de tanta desigualdad social, la esperanza radica en conducir la paz territorial a esquemas más profundos donde la seguridad pública sea el centro de las intervenciones, de ningún modo es una opción pensar aisladamente por más beneficio que pudiese ser la intervención sin seguridad.

Para corroborar lo anteriormente descrito, en el mes de octubre de 2018 la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía incautaron material de intendencia pertenecientes a fuerzas militares, entre ellos fusiles AK 47, Galil, Granadas de mano y municiones en el municipio de Ovejas, que al parecer hace parte de las caletas de los actores del conflicto, y que vienen siendo custodiadas por agentes externos con información privilegiada.

Esto es una señal de zozobra más allá de la inminente colaboración de la ciudadanía. Esto, realmente, parte en dos la acción territorial y la génesis de nuevos conflictos que interconectan municipios, como es el

caso de San Pedro, en la Sabana Sucreña y el Municipio de Ovejas; Chalán como epicentro y cuesta abajo; Toluviejo con tránsito al Municipio de San Onofre, con más de una opción de inteligencia y conexión del Municipio de Sincelejo, todo esto asociados al narcomenudeo.

La situación está tan delicada que hasta la academia se ha visto amenazada por asumir la investigación como fundamento social frente al análisis de los contextos de violencia, tal como aconteció con el Dr. Luis Trejo quien tuvo que salir del país como consecuencia de sus investigaciones académicas relacionadas con el narcotráfico y los circuitos criminales emergentes, tal como lo manifiesta el diario (El Tiempo, 2019):

Trejos es un prestigioso docente-investigador, PhD en Estudios Americanos, de la Universidad del Norte y director del Observatorio sobre Dinámicas de la Confrontación Armada e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), del Centro de Pensamiento UNCaribe desde donde ha revelado investigaciones relacionadas con las ilegalidades y nuevas violencias que han surgido dentro el marco del pos acuerdo en el Caribe Colombiano. (párr. 2)

Este resumen referenciado presenta algunas de las patologías sociales a las cuales se enfrenta la subregión de los Montes de María. Evidentemente, la preocupación surge en las posibilidades de nuevos circuitos de violencia asociados con el desequilibrio del orden social y la sujeción de recursos delictivos que permean la población, en particular la juvenil.

Estabilidad social y desarrollo frente a la violencia: un compromiso no solo social sino estatal

El 15 de marzo de 2016 se realizó la firma simbólica de la paz por parte de las comunidades campesinas; un acto de resiliencia y de apoyo al gobierno como forma de respaldar los acuerdos de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde ese mismo momento las esperanzas generadas por el acuerdo de paz en su fase de construcción y la proyección en su implementación mantenían la fe en la estabilidad del orden social, el desarrollo socio-productivo y la promoción de un liderazgo social para la construcción de la paz territorial.

El 6 de diciembre de 2016 por primera vez en la historia se realizó el Festival Cultural de la Reconciliación en los Montes de María, un evento emblemático desde una cultura de paz, promovido y dirigido por el Espacio Regional de Construcción de Paz, donde convergen organizaciones territoriales, los cuales reflexionan y aportan a través de iniciativas de paz los pilares del relacionamiento para la reconciliación.

El 4 y 5 de diciembre de 2018 en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, se realizó el II Festival de la Reconciliación de los Montes de María, festival creado como un espacio reconciliatorio en donde se realizaron diálogos improbables entre actores que hicieron parte del conflicto armado, entre ellos excombatientes de grupos armados y políticos que confluyeron en las lógicas del conflicto o empresarios, con víctimas de la región (Dejusticia, 2018).

Tomamos como referencias estos dos grandes y emblemáticos eventos —de los muchos que se han realizado—, teniendo en cuenta el momento histórico por el cual se realizaban: el primero y como lo expresamos, fue un espacio de respaldo a los acuerdos de paz y a la vez un llamado a la integración social; el segundo, con una connotación más profunda, el diálogo como herramienta de paz, los diálogos de improbables, tal como lo conceptualiza Lederach (2016), espacios que requieren de un proceso especial que empieza con dos ejes principales.

Por una parte, el comienzo de un proceso constructivo necesita un trabajo por separado con actores estratégicos, personas allegadas y de confianza de ambos lados. Estas personas claves son los primeros interlocutores con quienes hay que plantear los primeros contactos, con el objetivo de abrir una conversación diferente. El segundo eje se desarrolla con visión de contexto, este se enmarca en los temas o desafíos que son de posible interés común. Dichos temas pueden posibilitar el interés en dialogar.

Diferentes movimientos sociales, espacios regionales, mesas de interlocución, programa de desarrollo y paz, programas internacionales e instituciones tanto públicas como privadas aunaron esfuerzos para fortalecer capacidades, promover alianzas productivas, desarrollar mecanismo de incidencia y trabajo social en el equilibrio generador de diálogos entre

improbables o probables en desacuerdo, en donde actores que convergen en zonas geográficas con intereses heterogéneos puedan generar espacios donde cada contexto debe ser analizado y promovido desde las diferencias.

Ahora bien, el contexto actual, con ciertos matices asociados con amenazas, mayormente atenta con la promoción de la reconciliación que con mucho esfuerzo comunidades y organizaciones han venido construyendo. Uno de los últimos acontecimientos sucedió en el Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar en el Departamento de Bolívar, los habitantes denuncian amenazas de muerte que han circulado por vía WhatsApp que hoy alteran la tranquilidad de esta comunidad marcada por la violencia.

Como otra amenaza relacionada, solo a manera de contexto, referenciamos la acontecida ante el secretario de Interior del departamento de Bolívar, Pedro Castillo. Varios líderes de la zona alta de Montes de María expusieron lo que al parecer sería el resurgimiento de grupos al margen de la ley que estarían intimidando a los campesinos del sector. Estos tipos de acontecimientos cada vez son más frecuentes; las denuncias no se han hecho esperar, los consejos de seguridad se han activado, los niveles de riesgo aumentan y, evidentemente, se crean nuevos círculos de terror y zozobra.

Las políticas públicas de paz, pese a todas las circunstancias, crearon en el marco de posconflicto la triangulación necesaria para apoyar a los territorios a surgir. Las herramientas de planificación, la gestión del contrato paz (contrato plan) para los Montes de María y toda una suma de proyectos han puesto en función el aparato institucional en pro del desarrollo territorial, sin embargo, las tensiones aumentan paralelamente, la seguridad ciudadana se ve fisurada, las organizaciones sociales de base se desconcentran e impiden su normal funcionamiento, los líderes y lideresas intentan no ser tan visible (bajo perfil), además, a esto se suman los desplazamientos temporales a ciudades cercanas para activar medidas de autoprotección.

En tal sentido, y apelando a las premisas del apoyo solidario territorial, en primera instancia se requiere pensarse en la región, identificando potencialmente las conectividades sociales que le den soporte a la fuerza pública a evaluar el estado situacional, geoestratégico y de inteligencia para tener la posibilidad de prevenir y prever situaciones asociadas a

la desviación social. En segunda instancia, las garantías de seguridad ciudadana deben tener en cuenta la construcción de anillos de confianza, diálogos con la sociedad civil y la promoción de medidas que conlleven a la sana convivencia como pilar de la reconciliación.

Los procesos de desarrollo deben ser acompañados efectivamente por componentes que integren acciones de construcción de paz, medidas por las cuales el enfoque territorial, diferencial y de género promuevan esquemas socio-gubernamentales para proyectar acciones conjuntas, desestimando cualquier tipo estigmatización social o política que pongan en riesgo la implementación de acciones y conlleven a generar conflictos.

La realidad aún es desigual en términos de seguridad Bulla y Guarín (2015) manifiestan que el servicio de seguridad ciudadana que brinda el Estado colombiano es desigual, pues, se concentra principalmente en las grandes ciudades y en las cabeceras municipales, pero está ausente en vastas extensiones de la geografía nacional. En estas regiones resulta doloroso evidenciar la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley, para tramitar los conflictos de la ciudadanía y para proteger y promover un orden social basado en pautas de convivencia pacífica.

Sostener la seguridad no solo depende de aquellos que conviven y comparten las problemáticas y realidades diarias, sino del acompañamiento efectivo de los órganos del Estado que permitan el acceso a bienes y servicios, además, de un equilibrio social basado en justicia e igualdad. El restablecimiento de los derechos y la presencia en todos los niveles del Estado debe ser coherente con las necesidades efectivas de la población, así como proyectar desde el contexto las acciones pertinentes, los modelos replica no pueden ser implementados sin antes conocer las dinámicas poblacionales, incluyendo, claro está, la cultura en toda la expresión manifiesta de la identidad territorial.

El compromiso real en coordinar las acciones del Estado desde las políticas públicas requiere trabajar holísticamente en la comprensión de visiones compartidas de desarrollo que estabilicen los territorios y que promuevan crecimiento endógeno, mitigando la pobreza y ampliando las oportunidades desde el acceso, desde la oferta institucional que fortalezca el conocimiento y genere transformaciones positivas desde el ser, desde

su formación individual para engranarse en lo colectivo; de esta manera permitir fortalecer lazos de confianza que conduzcan al desarrollo social comunitario y a un mayor respaldo institucional.

En esta simbiosis es importante resaltar la vocación del territorio, su caracterización productiva, pero también los niveles de innovación que podrían ser parte de una exploración positiva en términos de desarrollo productivo e innovación tecnológica y social. Mantener el equilibrio social con asistencialismo no debe ser la consigna para promover confianza y seguridad. El proceso del orden social amerita trabajar en modelos de reciprocidad y coordinación de apoyo mutuo, esto quiere decir, diálogos permanentes, convergencia de actores, programación de acciones y compromisos en atención a la generación de alertas locales.

Los compromisos deben estar sujetos a niveles de gestión nacional que complementen la inversión social y el bienestar de las comunidades. La violencia se contrarresta con educación, el orden social es protegido cuando el conocimiento está al servicio de los territorios, donde los habitantes emprendan desde el conocimiento las oportunidades requeridas para innovar, transformar y coordinar solidariamente el desarrollo deseado, la apuesta de la vida querida y la manifestación de garantías de seguridad sostenida.

Conclusiones

La realidad de los Montes de María muestra un panorama de tensión globalizada y redefinida desde el contexto nacional, con respecto a la manera sistemática por la cual los liderazgos sociales se han visto amenazados y violentados. La perspectiva del posconflicto no solo indicaba la implementación de programa, planes y proyectos para reparar y restaurar, sino que generaba una esperanza para transitar con libertad en medio de los territorios con garantías de seguridad, o por lo menos con la percepción suficiente para movilizarse sin temor y actuar en los espacios requeridos socialmente.

La incidencia política desde las organizaciones está en una situación crítica, el efecto “posconflicto” creó una serie de trabajos focalizados en la subregión (Programas de desarrollo con Enfoque Territorial-Contrato Paz),

con un fuerte impulso desde los comités locales; sin embargo, el ejercicio de planeación frente a la transición del nuevo gobierno desesperanzó totalmente el trabajo realizado, dado que no se ha avanzado en gran medida en la ruta concertada en las diferentes asambleas definidas en el marco de estos planes.

Solo el Contrato Plan para los Montes de María ha tenido un efecto esperado para algunas comunidades, como, por ejemplo: el alcantarillado del Carmen de Bolívar; con sus proyectos productivos sectorizados, pero aún faltan muchos componentes y más municipios para que el desarrollo proponga un reto mucho más integral.

La seguridad ciudadana y el orden social han sido unos de los efectos condicionantes de la estabilidad para la paz. Las amenazas son cada vez más frecuentes y, en definitiva, la capacidad de respuesta por parte de la fuerza pública, pese a las oportunas denuncias son tardías, lo que hace, de cierta manera, que el fenómeno crezca; no obstante, cabe anotar que ya empezaron, por lo menos, a cubrir gran parte de dichas denuncias con resultados óptimos, como es el caso de la erradicación manual de hectáreas de cultivos ilícitos en polígonos precisos del área rural del municipio de Ovejas.

El Estado colombiano debe garantizar a los ciudadanos el bienestar requerido, previniendo particularmente la repetición de acciones violentas que puedan escalar a posibles conflictos sociales y armados de hecho. El resurgimiento de células delictivas y de asociaciones criminales puede conducir a una desestabilidad ahondada en neo-reclutamientos, neo-desplazamientos y métodos de persuasión criminal que engruesen las tasas de muertes violentas en una subregión que se cree que fue la primera en estar en posconflicto.

Referencias

- Bulla, P. y Guarín, S. (28 de 08 de 2015). Seguridad rural en Colombia: una oportunidad para la consolidación del Estado. Bogotá, Colombia.
- Corporación Desarrollo Solidario. (26 de 12 de 2017). El agua: fortuna y desgracia para los habitantes de Marialabaja. Corporación Desarrollo Solidario: <https://www.cds.org.co/el-agua-fortuna-y-desgracia-para-los-habitantes-de-marialabaja/>

- Dejusticia. (03 de 12 de 2018). II Festival de la Reconciliación de los Montes de María: “En la Hamaca Grande nos reconciliamos”. Dejusticia <https://www.dejusticia.org/los-invitados-al-ii-festival-de-la-reconciliacion-de-los-montes-de-maria-en-la-hamaca-grande-nos-reconciliamos/>
- El Heraldo. (Enero 04 de 2018). En sucre, homicidios aumentaron en el 2017. El Heraldo. <https://www.elheraldo.co/sucre/en-sucre-homicidios-aumentaron-en-el-2017-443480>
- El Tiempo. (Enero 29 de 2019). Luis Trejos, el profesor que debió salir al exilio. Al investigador sobre conflicto armado y corrupción en el Caribe, lo amenazaron de muerte. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/luis-trejos-el-profesor-que-debio-salir-al-exilio-320424>
- Lederach, J. (02 de 2016). “Con un Acuerdo de paz, Colombia abre una nueva era de posibilidades. Se requerirán nuevas capacidades”. Recuperado el 29 de 02 de 2019, de Oficina del Alto Comisionado para a Paz: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/noviembre/Pioneros-en-la-construccion-de-paz-desde-la-regiones.aspx>
- Mayntz, R. (2001). El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. CLAD Reforma y Democracia No. 21.